



JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE:

TECDMX-JEL-132/2026

PARTE ACTORA:

[REDACTED]

AUTORIDAD RESPONSABLE:

ÓRGANO DICTAMINADOR DE LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

SECRETARIADO:

MARIBEL TATIANA REYES PÉREZ Y
JOEL HIDALGO EVERARDO

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiséis.

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, determina **desechar** de plano la demanda presentada, debido a que la misma carece de firma autógrafa.

ÍNDICE

GLOSARIO.....	1
ANTECEDENTES.....	2
CONSIDERACIONES.....	4
PRIMERA. Competencia.....	5
SEGUNDO. Improcedencia.....	5
RESUELVE.....	14

GLOSARIO

Autoridad responsable u Órgano Dictaminador	Órgano Dictaminador de la Alcaldía Álvaro Obregón
Código Electoral	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Constitución Local	Constitución Política de la Ciudad de México.
Consulta	Consulta de Presupuesto Participativo
Instituto Electoral	Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Ley de Participación	Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
Ley Procesal	Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
Modelo de Operación	Modelo de Operación para la Instrumentación de la Votación y Opinión anticipada de la Ciudadanía Residente en el Extranjero, en estado de Postración y sus Cuidadoras Primarias, y en Prisión Preventiva para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027
Parte actora o promovente	██ ¹
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

LA LEYENDA DE LOS DATOS TESTADOS, SE ENCUENTRA AL FINAL DEL PRESENTE

ANTECEDENTES

1. De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Proceso para la Consulta.

A. Disposiciones Generales

¹ La parte actora se encuentra en prisión preventiva.



1. **1. Convocatoria.** El nueve de enero, el Consejo General del Instituto Electoral emitió la Convocatoria.²
2. **2. Dictaminación de los proyectos.** Del cuatro de febrero al diez de marzo, el Órgano Dictaminador de la Alcaldía llevó a cabo la dictaminación de los proyectos, determinando su viabilidad o inviabilidad, según cada caso.
3. **3. Publicación.** El doce de marzo, se publicaron las dictaminaciones en la plataforma digital y en los estrados de las Direcciones Distritales.
4. **4. Aclaración.** Del trece al dieciséis de marzo, las personas proponentes de los proyectos dictaminados como no viables, presentaron su inconformidad mediante un escrito aclaratorio.
5. **5. Re-dictaminación.** Del diecisiete al veintiuno de marzo, el órgano Dictaminador de la Alcaldía, realizó la re-dictaminación de proyectos, en atención a los escritos de aclaración presentados.

² Mediante boletín de prensa UTCSyD-012. Ajustada por acuerdo IECM/ACU-CG-013/2026 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se modifica la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el juicio electoral TECDMX-JEL-2/2026, por acuerdo IECM/ACU-CG-018/2026 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se modifican los plazos establecidos para el registro y trámite de los proyectos propuestos por las personas habitantes y ciudadanas para el presupuesto participativo 2026 y 2027, previstos en la BASE SEGUNDA, así como por el diverso IECM/ACU-CG-023/2026, por el que se aprueba modificar los plazos establecidos para la dictaminación, re-dictaminación, envío, publicación, medios de impugnación, aleatorización para asignar el número de identificación y difusión de los proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, previstos en las BASES OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

6. **6. Publicación.** El veintitrés de marzo, se publicaron las re-dictaminaciones en la plataforma digital y en los estrados de las Direcciones Distritales.

II. Juicio electoral.

7. **1. Medio de impugnación.** Inconforme con la re-dictaminación respectiva, el veintisiete de marzo, la parte actora presentó escrito de demanda.
8. **2. Turno.** El mismo veintisiete de marzo, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente **TECDMX-JEL-132/2026** y turnarlo a la Ponencia del Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez, para su sustanciación y resolución correspondiente. Lo cual, se cumplimentó el mismo día.³
9. **3. Radicación.** El treinta de marzo, el Magistrado Instructor radicó en la Ponencia el expediente de mérito.
10. **4. Elaboración del proyecto.** Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor ordenó la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERACIONES

³ Mediante el oficio **TECDMX/SG/701/2026**.



PRIMERA. Competencia.

11. El Pleno del Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral, toda vez que, en su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, es garante de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en la materia.
12. Al respecto, se debe precisar que a este Tribunal Electoral le corresponde conocer de los juicios electorales que promueva la ciudadanía suscitados en el desarrollo de los instrumentos de democracia participativa, relacionados con probables irregularidades en su desarrollo, con el fin de verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto en la Constitución local y en la ley.
13. Dicha hipótesis se actualiza en la especie, habida cuenta que la parte actora controvierte las re-dictaminaciones emitidas por la autoridad responsable en sentido negativo recaídas a los proyectos de presupuesto participativo que presentó denominado “Reforestando Torres de Potrero”, identificados con los números de folio IECM-DD23-000655/26 y IECM-DD23-000560/27.

SEGUNDO. Improcedencia.

14. Este Tribunal Electoral considera que, con independencia de que pudiera actualizarse otra causal de improcedencia, **el medio de**

impugnación debe desecharse en virtud de que el escrito de demanda carece de firma autógrafa.

Marco jurídico.

15. El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
16. Al respecto, este órgano jurisdiccional debe examinar si el medio de impugnación satisface los presupuestos procesales establecidos en la ley adjetiva, a efecto de determinar su procedencia y, por ende, pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada.
17. Ello, en virtud de que la prosecución de un juicio es una cuestión de orden público, por lo que es necesario analizar los supuestos de procedencia de manera preferente.
18. Lo anterior, en el entendido de que, si se actualiza alguna causa de improcedencia, existiría un impedimento para la válida constitución del proceso, la sustanciación del juicio y, en consecuencia, para dictar sentencia que resuelva el fondo de la materia de impugnación.

B. Caso concreto.

19. En el caso, la parte actora impugna las re-dictaminaciones de los proyectos denominados “Reforestando Torres de Potrero”, identificados con los números de folio IECM-DD23-000655/26 y



IECM-DD23-000560/27, mediante las que se determinó su inviabilidad, y solicita que este Tribunal, en plenitud de jurisdicción, declare la viabilidad del proyecto. Para ello, esencialmente controvierte:

- **La indebida fundamentación y motivación de las re-dictaminaciones**, en contravención a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, así como en los últimos párrafos del artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana, al estimar que la autoridad responsable invoca disposiciones inaplicables al caso y sustenta su determinación en razones inexistentes, insuficientes o incongruentes.
 - **La falta de exhaustividad en las re-dictaminaciones**, ya que la autoridad responsable se limitó a reiterar el contenido del dictamen primigenio, sin atender los planteamientos formulados en el escrito de aclaración, lo que, a su dicho, evidencia una omisión en el análisis integral del asunto.
 - **La falta de exhaustividad en las re-dictaminaciones**, ya que la autoridad responsable se limitó a reiterar el contenido del dictamen primigenio, sin atender el escrito de aclaración lo que a su decir evidencia una falta de exhaustividad.
20. Un primer aspecto por considerar es que el artículo 47 de la Ley Procesal Electoral dispone, en esencia, los requisitos que deben observarse para la presentación de los medios de impugnación.

21. Con relación a ello, el artículo 49 de la citada Ley señala que los medios de impugnación son improcedentes cuando se actualice alguna de las causales previstas por el mismo precepto. En el entendido de que la consecuencia jurídica es el desechamiento de plano de la demanda, cuando no se haya admitido el medio de impugnación.
22. Las fracciones I a XII del artículo invocado establecen hipótesis específicas de improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral; en cuanto a la falta de firma autógrafa en la demanda, la contiene la fracción XI.
23. Siguiendo esa pauta, el artículo 80, fracción V, de la Ley Procesal prevé que la Magistratura que sustancie algún expediente podrá someter a consideración del Pleno la propuesta de resolución para desechar el medio de impugnación, cuando de su revisión advierta, entre otras cuestiones, que encuadra en una de las causales de improcedencia o sobreseimiento.
24. En ese orden, el artículo 91, fracción VI, de la referida Ley ordena que las resoluciones del Tribunal Electoral podrán tener como efecto, entre otros, desechar o sobreseer el medio de impugnación, según sea el caso, cuando concurra alguna de las causales de improcedencia establecidas en el mismo ordenamiento.
25. Como se adelantó, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 49, fracción XI, de la Ley Procesal, que establece que los medios de impugnación previstos en dicho ordenamiento serán improcedentes, y por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando se



omita hacer constar el nombre y firma autógrafa o huella digital de la parte promovente, **siendo que en el caso que nos ocupa, la demanda carece de la firma autógrafa de la parte actora.**

26. Sin que pase desapercibido para este Tribunal Electoral que anexo a su demanda obra el escrito por el que la persona presentó, en su oportunidad, su solicitud de registro de proyecto de presupuesto participativo el cual está firmado.
27. No obstante, esta rúbrica en un documento anexo no puede ser considerada para tener por cumplido el requisito de procedencia, puesto que la finalidad de su escrito de solicitud de registro fue diversa al propósito de la demanda objeto de análisis.
28. Efectivamente, la intención de la parte actora en dicho curso fue presentar, en su momento, un proyecto de presupuesto participativo ante la autoridad competente, sin embargo, no es patente la voluntad de la parte promovente para iniciar un litigio y someterlo a la jurisdicción de este Tribunal Electoral, en contra del acto concreto, dado que la manifestación de la voluntad de acceso a la justicia debe ser real, actual e inmediata, sin que puedan equivalerse los formatos administrativos a la presentación de un medio de impugnación.
29. Es de explorado Derecho que la demanda es el escrito mediante el cual las personas ejercen su derecho de acción o acceso a la jurisdicción y con ella se inicia un proceso judicial o juicio.
30. De ahí que, la manera manifiesta de expresar la voluntad para activar la función judicial es precisamente la firma en la demanda, con lo cual existe certidumbre con relación a la intención de una

persona de iniciar un proceso, cuestión que no ocurre en el particular, pues si bien conforme con los anexos de su escrito es claro que la persona tuvo la intención de presentar un proyecto, no es manifiesta su voluntad para promover un juicio de la competencia de este Tribunal Electoral.

31. Esto es así, porque la parte actora es una persona en prisión preventiva, quien tuvo material y jurídicamente la posibilidad de presentar su escrito de solicitud de proyecto, sin que se advierta o acredite algún obstáculo para la firma y presentación de su escrito de demanda.
32. Así es, aun cuando la parte actora se encuentra privada de la libertad, ello no implica una imposibilidad material para cumplir con dicho requisito, lo cual se corrobora precisamente con la posibilidad que tuvo para firmar y presentar su escrito de solicitud de registro de proyecto desde el lugar en el que cumple la medida preventiva impuesta.
33. De manera que, el contexto jurídico y material en el que se encuentra le permitió participar en el proceso de participación ciudadana sobre presupuesto participativo, empero, no se advierte algún cambio en su situación material o jurídica que le impidiera manifestar su voluntad para tener acceso a la jurisdicción.
34. Por tanto, la situación particular de la parte actora no justifica la inobservancia del requisito en cuestión, ni permite tenerlo por colmado, pues no se advierte que exista algún cambio en su situación que implique una imposibilidad real para cumplir con el mismo.

35. Por el contrario, derivado del **Modelo de Operación**, el Instituto Electoral a través de sus Direcciones Ejecutivas, así como la Defensoría Pública, dan acompañamiento a las personas en situación de Prisión Preventiva para las distintas etapas del proceso de Presupuesto Participativo; como la etapa de registro, la de presentación de escritos de aclaración, y la de presentación de medios de impugnación, de lo que se concluye que la parte actora no solo tuvo la posibilidad real y jurídica de firmar su demanda, sino que contó con la asesoría jurídica para ello.
36. Aceptar lo contrario implicaría generar una excepción no prevista en la normativa aplicable, en detrimento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
37. Ahora bien, dentro del formato “Solicitud de registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”, anexo a la demanda, existe un apartado en el que se indicó lo siguiente:

“En caso de que mi propuesta de registro sea dictaminada en la etapa correspondiente

A. En sentido negativo:

*Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, relativos a los procedimientos de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son verídicos, y solicito, **en caso de que mi registro sea dictaminado en sentido negativo, el proyecto sea re-dictaminado, con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:***

PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Ustedes C.C. Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicito respetuosamente:

PRIMERO. *Tenerme promoviendo en tiempo y forma, el presente Juicio Electoral, mediante este escrito y pruebas documentales que acompaño.*

SEGUNDO. *Declarar procedente el juicio y entrar al estudio de la cuestión planteada.*

TERCERO. *Revoque el re-dictamen emitido en mi proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente y en plenitud de jurisdicción lo declare viable”.*

Énfasis propio

38. De lo transcrito, en esencia, se advierte la petición de que en caso de ser negativo el dictamen del proyecto presentado, su propuesta sea re-dictaminada con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente.
39. Adicionalmente, en el apartado de peticiones se encuentra dirigido a las personas integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral con la finalidad de que se tenga por presentado en tiempo y forma el juicio electoral y a partir de ello conseguir la revocación del re-dictamen de su proyecto.
40. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que esa petición no es suficiente para establecer que la demanda del medio de impugnación cuenta con firma autógrafa ni la manifestación de la voluntad de quien promueve una demanda.
41. Lo anterior, porque se puede advertir que este documento contiene la **fecha de 16 de febrero**,⁴ congruente con la etapa de

⁴ Señala Varonil Norte 16/Febrero.

registro de proyectos (25 de enero al 1 de marzo) y previo a la conclusión de las etapas dictaminación (4 de febrero al 10 de marzo) y re-dictaminación (17 al 21 de marzo) correspondientes, **lo que evidencia que no se firmó con la intención de presentar una demanda**, pues en todo caso se trataba de un hecho futuro incierto.

42. Así, la finalidad expresa de ese documento consistía en solicitar la presentación de un proyecto para el presupuesto participativo 2026 y 2027, porque es un hecho notorio⁵ que se trata del formato aprobado por el Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM-ACU-CG-004/2026, de 9 de enero de 2026, no así de una manifestación redactada por la persona proponente.
43. De ahí que, la solicitud de registro de proyecto no puede considerarse como la presentación de un medio de impugnación para controvertir la re-dictaminación negativa que alega la parte actora, por lo que el citado documento no puede subsanar la falta de firma autógrafa.
44. Ello, porque la firma otorga certeza respecto a la voluntad de ejercer el derecho de promover un medio de impugnación, al dar autenticidad a la demanda, ya que permite identificar a quien

⁵ De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal, así como en el criterio orientador contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 y la tesis I.3o.C.450 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR” y “HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIR EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO”, respectivamente.

emitió el documento y vincularle con el acto jurídico contenido en la misma, lo que no sucede en el caso.

45. En consecuencia, **procede desechar de plano la demanda.**
46. **TERCERA. Vinculación al Instituto Electoral.** Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima procedente vincular al Instituto Electoral, para que previo al siguiente proceso de presupuesto participativo y en los subsecuentes, implemente las acciones necesarias a fin de que las personas que se encuentren en prisión preventiva estén en posibilidades de presentar los medios de impugnación que correspondan cumpliendo los requisitos procesales respectivos.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se **desecha de plano** la demanda presentada por la parte actora, por las razones señaladas en la parte considerativa.

SEGUNDO. Se **vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México** para que proceda en los términos planteados en la parte final de esta determinación.

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda.

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tecdmx.org.mx), una vez que esta sentencia haya causado estado.



Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por **mayoría** de tres de votos a favor del Colegiado José Jesús Hernández Rodríguez y las Magistradas Laura Patricia Jiménez Castillo y Karina Salgado Lunar, con el voto en contra de los Magistrados Armando Ambriz Hernández y Osiris Vázquez Rangel, quienes emiten voto particular de manera conjunta, mismo que corre agregado a la presente sentencia, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA⁶.

Con el debido respeto a nuestros pares, formulamos el presente **voto particular**, respecto a los desechamientos aprobados por la mayoría de integrantes de este Tribunal, en los juicios electorales ⁷ interpuestos por personas que se encuentran en

⁶ Con fundamento en los artículos 185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 87, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; así como 9 y 100, párrafo segundo, fracción III, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

⁷TECDMX-JEL-087/2026, TECDMX-JEL-088/2026, TECDMX-JEL-089/2026, TECDMX-JEL-092/2026, TECDMX-JEL-093/2026, TECDMX-JEL-094/2026, TECDMX-JEL-097/2026, TECDMX-JEL-098/2026, TECDMX-JEL-099/2026, TECDMX-JEL-102/2026, TECDMX-JEL-103/2026, TECDMX-JEL-104/2026, TECDMX-JEL-107/2026, TECDMX-JEL-108/2026, TECDMX-JEL-109/2026, TECDMX-JEL-112/2026, TECDMX-JEL-113/2026, TECDMX-JEL-114/2026, TECDMX-JEL-117/2026, TECDMX-JEL-118/2026, TECDMX-JEL-119/2026, TECDMX-JEL-122/2026, TECDMX-JEL-123/2026, TECDMX-JEL-

prisión preventiva bajo el argumento de que las demandas interpuestas carecen de firma autógrafa.

Ello porque consideramos que existen elementos suficientes derivado del contexto particular de las personas que se encuentran privadas de su libertad, de manera específica, en prisión preventiva, que permiten concluir que a dichas personas debe otorgarse el tratamiento de un grupo vulnerable al enfrentar dificultades para ejercer sus derechos, como en el caso, la interposición de medios de impugnación durante el desarrollo de procesos de participación ciudadana.

¿Qué resolvió la mayoría?

En la sentencia aprobada se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 49, fracción XI, de la Ley Procesal, que establece que los medios de impugnación previstos en dicho ordenamiento serán improcedentes, y por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando se omita hacer constar el nombre y firma autógrafa o huella digital de la parte promovente, advirtiéndose que en los diversos casos que nos ocupan, las demandas carecen de la firma autógrafa de la parte actora.

Asimismo, en dichos proyectos se reflexiona que los actores presentaron anexo a su demanda el escrito por el que la persona en prisión preventiva presentó, en su oportunidad, su solicitud de

124/2026, TECDMX-JEL-127/2026, TECDMX-JEL-128/2026, TECDMX-JEL-129/2026, TECDMX-JEL-132/2026, TECDMX-JEL-133/2026, TECDMX-JEL-134/2026, TECDMX-JEL-137/2026, TECDMX-JEL-138/2026, TECDMX-JEL-139/2026, TECDMX-JEL-142/2026, TECDMX-JEL-143/2026, TECDMX-JEL-144/2026, TECDMX-JEL-147/2026, TECDMX-JEL-148/2026, TECDMX-JEL-149/2026.

registro de proyecto de presupuesto participativo el cual se encuentra firmado.

Sobre el particular se considera dicha rúbrica en un documento anexo no puede ser considerada para tener por cumplido el requisito de procedencia, sosteniendo que la finalidad de dicho escrito de solicitud de registro fue diversa al propósito de la demanda interpuesta, por lo que no resulta patente la voluntad de la parte promovente para iniciar un litigio y someterlo a la jurisdicción de este Tribunal Electoral.

Esto se considera así, ya que para la mayoría la parte actora al ser una persona en prisión preventiva, tuvo material y jurídicamente la posibilidad de presentar su escrito de solicitud de proyecto, sin que se advierta o acredite algún obstáculo para la firma y presentación de su escrito de demanda, lo cual se corrobora precisamente con la posibilidad que tuvo para firmar y presentar su escrito de solicitud de registro de proyecto desde el lugar en el que cumple la medida preventiva impuesta.

¿Por qué no compartimos ese criterio?

No compartimos el criterio de la mayoría, pues consideramos que la situación particular de la población que se encuentra en prisión preventiva debe analizarse en un contexto más amplio a efecto de estimar si en los casos que se nos presentan se encuentra satisfecho el requisito de firma autógrafa.

Por lo que hace a la firma de quien promueve, si bien, no se encuentra en el escrito de demanda, dado el contexto de la persona promovente, se considera que es posible tener por

satisfecho este requisito en los términos que a continuación se exponen:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas detenidas son propensas al potencial abuso de sus derechos, pues se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante la frecuente falta de políticas públicas y condiciones de violación sistemática de sus derechos humanos que son frecuentes en las prisiones.⁸

Por otro lado, la Sala Superior ha establecido con claridad que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar -ya que no han sido condenadas y, por tanto, se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia- y que la suspensión de los derechos político-electorales a que se refiere la fracción II, del artículo 38 constitucional no puede aplicarse de manera automática sino interpretarse de forma armónica con el derecho al voto y los estándares internacionales de derechos humanos.⁹

Asimismo, ha indicado que la problemática que se genera en estos contextos no necesariamente versa sobre el reconocimiento del derecho al voto activo, sino en la falta de mecanismos que permiten ejercerlo, por lo que **el Estado, a través de los Institutos Electorales tiene la obligación de implementar medidas para hacerlo efectivo**, de esa manera, se estableció la obligatoriedad de la implementación progresiva de programas que garantizaran el ejercicio del voto de las

⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Consultable en <https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf>

⁹ Al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO.



personas en prisión preventiva, con miras a su plena materialización en procesos electorales futuros.

En ese contexto, por lo que hace a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en la Convocatoria se estableció que con el objeto de salvaguardar el derecho de participar en la vida política de la ciudadanía sin sentencia firme que suspenda sus derechos político-electorales, el Instituto Electoral garantizará el derecho de emitir su voto y opinión en la Elección y la Consulta, de conformidad con los principios de inclusión, legalidad, libertad y no discriminación.

Al efecto, se indicó que las personas en esta condición podrían registrar proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia y emitir su opinión durante la Consulta y votar en la Elección en la Unidad Territorial que le corresponda.

En el caso, la parte actora forma parte del grupo de personas proponentes que se encuentran en situación de prisión preventiva, y que acude a ejercer su derecho a participar en la consulta para el presupuesto participativo 2026 y 2027.

Al respecto, en la base Quinta del referido documento convocante se señaló que, para la participación de personas en prisión preventiva, el Instituto Electoral se coordinaría con las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México.

Lo anterior, a fin de establecer un convenio de apoyo y colaboración para brindar las facilidades necesarias que les permitan conocer sobre la Elección de las COPACO, y la

Consulta, así como registrar proyectos, presentar escritos de aclaración, emitir su votación y opinión y conocer los resultados de la Elección y la Consulta.

Para lo cual, **en atención a las circunstancias propias de las personas en prisión preventiva, se implementaría un formato simplificado¹⁰ para el registro de las propuestas de proyectos de presupuesto participativo mismo que, además, contiene la expresión de la voluntad de las personas que los suscribieron para que, ante la eventual negativa, se presentara el medio de impugnación correspondiente, como se advierte de la parte final del mismo:**

<p>A. En sentido negativo:</p> <p>Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, relativos a los procedimientos de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son verídicos, y solicito, en caso de que mi registro sea dictaminado en sentido negativo, el proyecto sea re-dictaminado, con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZADO <input type="checkbox"/> NO AUTORIZADO</p>
<p>PETICIONES</p> <p>Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Ustedes C.C. Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicito respetuosamente:</p> <p>PRIMERO. Tenerme promoviendo en tiempo y forma, el presente Juicio Electoral, mediante este escrito y pruebas documentales que acompaño.</p> <p>SEGUNDO. Declarar procedente el juicio y entrar al estudio de la cuestión planteada.</p> <p>TERCERO. Revoque el re-dictamen emitido en mi proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente y en plenitud de jurisdicción lo declare viable.</p>	

De lo anterior, se obtiene que las personas que firmaron el formato **otorgaron su consentimiento y solicitaron expresamente a las y los Magistrados de este Tribunal**

¹⁰ Aprobado por el Instituto Electoral al emitir la Convocatoria Única, como Anexo 8.



Electoral que, de dictaminarse negativamente el proyecto presentado, **se tuviera por promovido en tiempo y forma el juicio electoral y se revocara el redictamen** que eventualmente recaería a la propuesta que se presentó.

Esta cuestión así se considera puesto que, en suma al contexto narrado del cual se advierte la implementación del mecanismo en la Convocatoria para privilegiar la participación del sector, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral allegó al presente expediente diversos elementos que deben tomarse en cuenta para comprender las dificultades materiales que tienen las personas en esta circunstancia, mismas que ponen de manifiesto los impedimentos que tiene este sector para apegarse a los requerimientos que en situaciones ordinarias, se exigen a las personas promoventes de los medios de impugnación.

En ese sentido, señaló lo siguiente:

a. Observancia de los plazos legales:

El diseño normativo procesal electoral establece términos acotados que imposibilitan realizar trámites presenciales en centros penitenciarios una vez conocido el resultado de la redictaminación:

- Publicación en estrados de resultados de redictaminación: 23 de marzo de 2026.
- Plazo para interponer medios de impugnación: Concluye el 28 de marzo de 2026.

- **Margen de acción:** Se contaba con 5 días naturales entre la publicación del resultado y el vencimiento del plazo legal para impugnar.

Con ello en mente, resultaba complicado poder lograr en tiempo y forma las visitas necesarias para hacer de conocimiento a la persona en prisión preventiva el resultado de la redictaminación, recabar su consentimiento para promover medios de impugnación y nuevamente gestionar una visita para recabar su firma en los escritos de demanda correspondientes en el plazo procesal que se prevé para su tramitación, lo anterior si se toma en cuenta que de acuerdo con el "Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios", la organización conlleva lo siguiente:

Trámite administrativo: La solicitud a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debe incluir el motivo de la visita, listas pormenorizadas del funcionariado que ingresará, además de describir los documentos y/o materiales con que se pretende ingresar.

Se requiere gestionar la solicitud de ingreso con al menos ocho días de anticipación a la fecha propuesta, debido a que la Subsecretaría en mención, lo turna a la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario quien a su vez lo remite a cada centro, en cada uno de éstos se analiza la solicitud por parte del Comité interno de coordinación que sesionan los miércoles de cada semana para en su caso, aprobar dichas peticiones.



Una vez que se cuenta con la aprobación del ingreso, la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario informa al Instituto Electoral sobre la viabilidad de la visita, al tiempo de cuenta, en el caso particular de la promoción de medios de impugnación, una vez realizada la visita para hacer de conocimiento el resultado de la re-dictaminación de inviabilidad de proyectos, se suma el tiempo necesario para que en este caso la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México elabore técnicamente el medio de impugnación con los argumentos particulares que atiendan al sentido negativo del dictamen.

b. Idoneidad para implementar el Anexo 8 de la Convocatoria Única:

Considerando la publicación de la re-dictaminación de proyectos, la instancia administrativa de cara al procedimiento administrativo de ingreso a los centros penitenciarios (ocho días) identificó con antelación y en coordinación con la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral, que dicho trámite superaba en demasía el plazo legal para impugnar, entre que se notificaba a las personas promoventes del resultado y se pudiera generar la firma del medio respectivo, resultaba operativamente inviable agotar el trámite ordinario que se sigue a la interposición de los medios de impugnación, para estar finalmente a tiempo en torno a su promoción antes de la fecha de vencimiento del plazo.

Por tanto, la inclusión de las peticiones de Juicio Electoral en el **Anexo 8** en el momento del registro se constituyó como la vía idónea considerando las particularidades del trámite para:

- 1. Garantizar el acceso a la justicia:** Permite que la voluntad de impugnar quede manifestada de forma autógrafa, evitando que las pautas procesales y los tiempos ante el ingreso a los centros penitenciarios impidieran el ejercicio de derecho de defensa de las personas en prisión preventiva.
- 2. Cumplir con el principio de inclusión:** Asegurar que este sector de atención prioritaria cuente con ajustes procedimentales que les permitieran ejercer la tutela judicial generando condiciones similares de defensa que el resto de la ciudadanía, adaptando el procedimiento a sus circunstancias particulares de privación de la libertad.

En conclusión, el consentimiento previo en el **Anexo 8** no es solo una medida de facilitación, sino una garantía indispensable para que el derecho a la impugnación de las personas en prisión preventiva no se convierta en una letra muerta debido a la incompatibilidad entre los plazos judiciales y los protocolos de seguridad penitenciaria.

De lo anterior, se obtiene que el Instituto Electoral expone las condiciones que tornan de imposible cumplimiento los requisitos que suelen exigirse a la ciudadanía en general al interponer un medio de impugnación, tal como lo es que deben apegarse al “Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios”,



el cual, en conclusión, **implica el plazo mínimo de ocho días para que tal solicitud sea atendida y agendada por el comité correspondiente, el cual sesiona cada miércoles**, cuando, en el caso concreto, entre la publicación de la re-dictaminación y la fecha para presentar las demandas transcurrieron cinco.

De ahí que reitero que se tenga por eficaz el mecanismo implementado en la Convocatoria ante las complejas condiciones que tienen las personas en prisión preventiva y se tenga por expresada la voluntad contenida en el anexo 8, suscrito con la intención de atenuar esta dificultad y hacer posible la participación de este sector.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que **la parte actora suscribió el citado formato simplificado**, identificado como “Solicitud de Registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027” **con el objeto de hacer posible su participación en los términos indicados por la Base Quinta de la Convocatoria.**

- **Marco normativo aplicable al presente caso y principio de completitud.**

En ese sentido, conforme a lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (los cuales contemplan los principios de interpretación más favorable a la persona, a favor de la acción, y de la acceso a la justicia), tal circunstancia es suficiente para colmar el requisito de asentar la firma en la demanda, puesto que ello expresa de manera fehaciente, la manifestación

de la voluntad de quien suscribe el escrito inicial, de acudir en la vía y forma correspondiente, para deducir sus derechos.

Ello en apego al principio de completitud, que impone a las personas juzgadoras la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones y elementos que les sean presentados¹¹.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto al derecho de toda persona a una justicia “pronta, completa e imparcial”, que contempla la tutela judicial efectiva.

- Principio *pro actione*.

En ese sentido el **principio *pro actione*** deriva del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, y que se traduce en el derecho de contar con un acceso pleno a la jurisdicción, donde las personas puedan iniciar y ser parte en un proceso judicial y, sobre todo, obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución.

Estos derechos constitucionales, conllevan las correlativas obligaciones de las personas juzgadoras para hacer efectivas esas prerrogativas.

¹¹ Sobre los alcances del principio de completitud, véase la tesis con registro digital 2005968, de rubro **EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.**

Por lo que la garantía exige que las autoridades jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales, deben tener presente la razonabilidad (*ratio*) de la norma con el fin de evitar meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales, para tender a que haya un enjuiciamiento del fondo del asunto.

Lo anterior, configura en nuestro sistema jurídico el principio interpretativo *pro actione*, que prescribe que, atendiendo a una tutela judicial efectiva, la actitud de las autoridades jurisdiccionales debe ser aquella que a través de la interpretación de normas o la valoración de los hechos se maximice el acceso efectivo a la justicia, y se prefiera la interpretación que sea tendente a una resolución que decida el fondo de la controversia, y no aplicar por analogía alguna norma en aras de no avocarse a su análisis.

Por tanto, ante la obligación de privilegiar el acceso a la justicia y, atendiendo a los tiempos del proceso de participación ciudadana, **es que se considere superada la ausencia de firma autógrafa en el escrito de demanda, ya que se cuenta con la misma en el formato mencionado, anexo al escrito de demanda, por lo que se considera que forma parte de la misma.**

Si bien, la Ley Procesal prevé como requisito para la procedencia de un medio de impugnación, el hacer constar el nombre y firma autógrafa (o huella digital) de quien promueve, tratándose de personas postulantes en situación de prisión preventiva,

conforme al postulado de sencillez procesal (el cual forma parte de los derechos de acceso a la justicia, y tutela judicial efectiva), considerar que ello debe incluirse necesariamente en el escrito de demanda, constituiría una interpretación rigorista y un formalismo exacerbado.

- **Las personas en prisión preventiva pertenecen a un grupo vulnerable.**

Situación relevante en el caso de personas que enfrentan alguna dificultad para el ejercicio pleno de sus derechos, como son quienes están sujetos a prisión preventiva.

Las personas en situación de prisión preventiva están reclusas en un centro penitenciario en tanto se desarrolla un proceso por la posible comisión de un delito.

Acceder a ellas, o bien, que entablen comunicación con el exterior es una cuestión compleja, pues se requiere el cumplimiento de medidas de seguridad y de los requisitos establecidos por quienes administran los centros penitenciarios¹².

Así, las personas en situación de prisión preventiva se ubican dentro de un **grupo vulnerable**¹³, por lo cual, en apego a lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal; 4, 5,

¹² Véase los artículos 58, 59, y 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

¹³ En torno a la definición de grupo vulnerable, Pérez Contreras los conceptualiza como: "...aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados." Véase: Pérez Contreras, M. Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado (Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM). Mayo-Agosto de 2005. Disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm>

y 6, apartado H, de la Constitución Local, se considera que el **Tribunal tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, y adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier acción que anule o menoscabe el ejercicio de sus derechos.**

Ahora bien, las personas en situación de prisión preventiva, como grupos vulnerables, forman parte de las categorías sospechosas, sobre las cuales, la SCJN ha sostenido que, cuando una ley contiene una distinción basada en dicha categoría (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, **la condición social**, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y **tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas**), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad.

Así, en el asunto que hoy nos ocupa, para el caso de las personas proponentes de proyectos, en situación de prisión preventiva, las mismas se encuentran afectadas por una condición social que les impide acceder por los medios ordinarios por los que harían efectivos sus derechos de participación ciudadana, y en razón de ello, en riesgo potencial de que aquellos les sean vulnerados o disminuidos.

Ello, porque en principio, este grupo vulnerable no está en condiciones óptimas de tener conocimiento del resultado de las

dictaminaciones o re-dictaminaciones emitidas por el Órgano Dictaminador en los tiempos establecidos por la Convocatoria, y menos aún de elaborar un escrito de demanda en donde acudan a controvertir el sentido de las determinaciones que no le favorezcan, pues los tiempos abreviados del proceso de preparación para la Consulta del Presupuesto Participativo, son incompatibles con los procedimientos que permitan a las personas en estado de prisión preventiva, acceder al ejercicio pleno de sus derechos de participación.

Ello, porque es indudable que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades sin distinción alguna, lo cual incluso también se establece en el ámbito convencional¹⁴.

Así, válidamente se afirma que el marco jurídico constitucional, legal y convencional reconocen la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia o condición de discapacidad.

Lo que en el caso es relevante, porque el acceso efectivo a la justicia de las personas proponentes en situación de prisión preventiva, constituye un derecho humano de naturaleza fundamental, cuyo reconocimiento se encuentra previsto en diversos instrumentos internacionales y en el marco jurídico nacional, y cuya observancia resulta indispensable para garantizar la igualdad sustantiva y la tutela judicial efectiva.

¹⁴ Artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

- **¿Los derechos que tienen restringidos las personas en prisión preventiva no impactan al momento de impugnar la redictaminación?**

Las personas en prisión preventiva no solo se encuentran privadas de la libertad, sino que tienen restringidos **un cúmulo de derechos humanos, como lo son, entre otros, los de:**

- **tránsito,**
- **asociación,**
- **reunión,**
- **a la información** *-no fluye la información en prisión como sucede fuera de esos límites materiales-*,
- **al trabajo,**
- **a la vivienda,**
- **acceso a la cultura,**
- **acceso al internet.**

Consideremos entonces, que, quienes tienen restringido el acceso a internet, a sus comunicaciones, a la información, debían enterarse del resultado de la redictaminación para decidir si impugnan o no esa determinación.

Resulta evidente que la posibilidad de enterarse al mismo tiempo que la población en libertad no es exigible, y que si a ello le sumamos que tras eso, debían contactar a la persona que les redactaría o los asesoraría para presentar la demanda, luego, conocer puntualmente los términos de la demanda, para finalmente firmarla, y todo ello en cuatro días, lo que ha sido considerado como razonable para las personas en libertad, pero

no resulta así para las personas respecto de las cuales, como ya se ha señalado, es necesario pedir autorización para ingresar a verlas y llevarles los documentos necesarios para poder presentar la demanda, lo que lleva, como se ha precisado antes, más de ocho días, lo que supera el límite legalmente impuesto.

En este sentido, hay que considerar que el plazo de cuatro días para impugnar se encuentra en la normativa desde la misma se publicó por primera vez en 1999¹⁵, y que el derecho de las personas en prisión preventiva para presentar proyectos dentro del mecanismo de presupuesto participativo como participación ciudadana, data del año 2025, lo que muestra que no se ha considerado esta situación del grupo vulnerable en el marco normativo.

¿Las personas en prisión preventiva deben asumir la omisión legislativa o un inadecuado marco desarrollado por el IECM?

No.

Aunque el marco normativo aplicable no prevé que, dada la situación material de las personas en prisión preventiva, de algún medio de impugnación adecuado para reparar violaciones a sus derechos político, **al tener restringidos un cúmulo de derechos humanos (como ya se ha precisado)**, en un ejercicio

¹⁵ Desde el entonces Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 5 de enero de 1999, se preveía como requisito para la presentación del otrora recurso de apelación hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Asimismo, la primera ley específica en materia procesal electoral para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México- la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 2007, señala, entre otros requisitos que deben considerar las demandas, el nombre y la firma autógrafa del promovente. Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a través de una reforma publicada el 13 de noviembre de 2023, incorporó el derecho de las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme a emitir su voto en diversas elecciones, entre otras, las de presupuesto participativo en esta entidad.

que evite la discriminación de este grupo y a fin de hacer posible la igualdad sustantiva, se considera que las personas que se encuentren en tal circunstancia pueden acudir a reclamar la violación a sus derechos político-electorales si han expresado esa voluntad en un formato firmado de forma previa a la elaboración de la demanda.

De ahí que, en el caso en concreto resulta conforme a derecho realizar un ajuste razonable ponderando la situación de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que solicitaron el registro de un proyecto para ejecutarse con presupuesto participativo en la Ciudad de México, de esta manera se genera igualdad sustantiva entre todas aquellas personas que ejercen su derecho a participar en la definición de los proyectos que serán sometidos a elección el día de la jornada electiva, lo anterior porque **resulta necesario ponderar la situación de desventaja en que se encuentran** conforme a lo siguiente:

1. El **derecho a participar en esta consulta es un fin constitucionalmente válido**, porque constituye un mecanismo fundamental de **democracia participativa** y deliberativa, por el que las alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana garantizado que la ciudadanía intervenga directamente en la toma de decisiones sobre el destino de una parte de los recursos públicos¹⁶.

¹⁶ Artículo 26 de la Constitución Local.

2. Permitir a las personas que se encuentran en prisión preventiva impugnar de forma previa a conocer el resultado de la re dictaminación de sus proyectos, **es una medida idónea** porque permite garantizar su derecho de acceso a la justicia dada las restricciones a su derecho a la información, porque no hay constancia de cuando se enteraron en prisión de los resultados y dado que esta información en prisión preventiva no es de circulación libre sino restringida.

3. En casos como el que se analiza, impugnar de manera previa **es una medida necesaria**, porque no se advierte alguna otra posibilidad para que pudieran impugnar cumpliendo con la oportunidad de ley, pues tendrían que enterarse del resultado de la re dictaminación, contactar con quienes elaborarían la demanda, se tendría que elaborar la misma y luego llevárselas a firmar, contando con la posibilidad de reunirse con la persona en prisión preventiva de conformidad con las exigencias administrativas, de seguridad y actividades preagendadas del centro de reclusión, todo es en los siguientes cuatro días a que surtiera efectos la notificación de la re dictaminación.

Considerando que entre que, se solicita a las autoridades del centro de reclusión y que es posible ingresar a recabar la firma, transcurre una semana.

4. Es **proporcional** en sentido restringido porque logrando el acceso a la justicia, aunque se flexibiliza de

manera razonable un requisito de procedibilidad, solo se afecta un derecho instrumental o procedimental en favor del derecho sustantivo de acceso a la justicia, sin que se lesione el derecho de algún tercero, pues el admitir a trámite la demanda no dice nada aún respecto a que lo planteado en la misma sea correcto.

De esta manera, cuando la expresión de la voluntad para impugnar posterior a la elaboración de la demanda se encuentra limitada por las condiciones de reclusión, pero es posible identificar de forma innegable en un formato suscrito de forma autógrafa de forma previa, se considera que se tiene la **obligación ineludible de resolver el conflicto** planteado, incluso cuando no existe una norma jurídica específica aplicable a la situación.

- **¿Cómo debe interpretarse la firma autógrafa plasmada en el Anexo 8 de la solicitud de registro de proyectos?**

Primeramente, es un hecho no controvertido que la firma que se encuentra plasmada en el documento es autógrafa y que corresponde al actor.

En segundo lugar, es posible concluir que la firma del formato referido no puede considerarse como el consentimiento para impugnar dado que no se conoce en ese momento ni la resolución de la redictaminación, ni el contenido de la demanda, sin embargo, es conforme a derecho concluir que es voluntad de las personas en prisión preventiva, agotar la cadena

impugnativa, dado el caso de que no se redictamine de forma favorable a sus intereses.

Y entre esas dos posibles interpretaciones, a fin de estar a lo que más favorezca a los integrantes del grupo vulnerable, se considera que debe estarse a la segunda interpretación de su firma autógrafa.

Solo eso permite cumplir con el parámetro constitucional y convencional¹⁷.

- Conclusión respecto a la presencia de firma autógrafa.

En el caso, en la última foja del escrito de demanda, con posterioridad al apartado de peticiones, se aprecia únicamente el nombre completo de la persona promovente.

Y si bien tal circunstancia, en principio, podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción XI de la Ley Procesal, **una interpretación más favorable a los derechos humanos de las personas proponentes en situación de prisión preventiva permite afirmar que sí se colmó ese requisito de procedibilidad con la firma autógrafa del Anexo 8.**

Así, es que consideramos que en atención a las condiciones particulares que tiene este grupo en situación de vulnerabilidad y

¹⁷ Constitución Local. **Artículo 4** *Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.*
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales... **6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas,** dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.
C. Igualdad y no discriminación 1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. **Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.**



debido a que el diseño normativo imposibilitaría el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales (y de participación ciudadana, en este caso) es que **se tiene por expresada la voluntad en los términos del anexo que fue debidamente suscrito y dirigido al Tribunal en fecha previa**, con el objeto de que se tuviera por presentada su inconformidad ante la eventual dictaminación en sentido negativo de su proyecto.

Determinar lo contrario, **implicaría la denegación de justicia y el desconocimiento pleno del mecanismo aprobado en la Convocatoria para privilegiar la participación de las personas en prisión preventiva**, lo cual, a la postre generaría la preservación de la problemática identificada por la Sala Superior, de ahí que se tenga, por excepción, por debidamente cumplido el requisito.

En consecuencia, al tenerse por superado el requisito relativo a la firma autógrafa, así como los demás relativos a la procedencia de los medios de impugnación interpuestos por personas en prisión preventiva, en nuestro concepto resultaba pertinente abordar el fondo de los asuntos planteados.

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA.

ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
MAGISTRADO

LAURA PATRICIA JIMÉNEZ
CASTILLO
MAGISTRADA

KARINA SALGADO
LUNAR
MAGISTRADA

OSIRIS VÁZQUEZ
RANGEL
MAGISTRADO

LUCÍA HERNÁNDEZ CHAMORRO
SECRETARIA GENERAL

“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y los numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra testada un cintillo negro.”